



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 39

DICIEMBRE 2009 - ENERO 2010

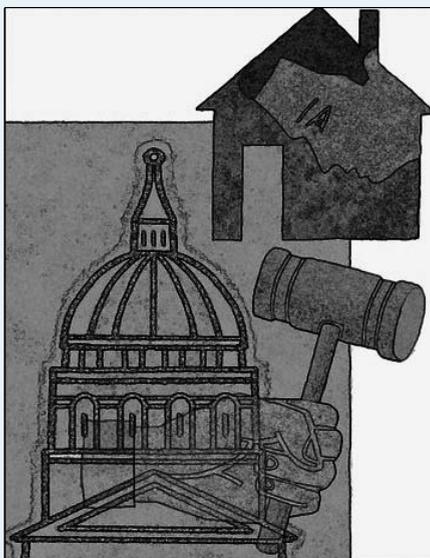
Perspectivas 2010: restablecimiento del Pacto y continuidad en la crisis económica

El inicio del año 2010 ha abierto una serie de expectativas para los diferentes actores sociales del país. Muchos esperan una mejoría significativa del contexto político y sobre todo, de la situación económica. Sin embargo, el cierre del 2009 y los acontecimientos que se han desarrollado durante el primer mes del año, indican que las perspectivas para el 2010 en Nicaragua, no cambiarán mucho de rumbo en el plano político y económico.

Así, no queda más que preparar las energías para un escenario de país donde la carrera de las fuerzas políticas para controlar la competencia electoral del 2011, poco a poco va a saturar el ambiente.

Gobierno por decreto: la anulación de los poderes estatales

El 2009 fue un año en el que el gobierno intentó frenar las expresiones de descontento y las manifestaciones ciudadanas con la confrontación y la agresión, tal como quedó demostrado con el ataque a la marcha de la Coordinadora Civil y las agresiones a otros activistas ciudadanos en el transcurso del año. Además, intentó avanzar su proyecto de reconcentración del poder en la figura del presidente utilizando para ello todos los medios legales, políticos y económicos disponibles, y sin



preocuparse por las apariencias y la opinión de la sociedad.

Sin embargo, la decisión de los ciudadanos de reclamar su derecho a la libre expresión y movilización en noviembre pasado, durante la multitudinaria marcha convocada por la sociedad civil organizada para reclamar nuevamente los votos que le fueron arrebatados en las elecciones municipales del 2008, sirvieron como una campanada de alerta para el presidente Ortega en cuanto a su estrategia de control social. Además, se encontró con la dificultad de no poder conseguir los votos que necesitaba en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución y legalizar sus pretensiones reeleccionistas.

La decisión que tomó entonces, fue de gobernar por decreto, anulando a los demás poderes estatales o utilizándolos según su propia conveniencia. De esa manera, logró que a finales del 2009 la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución que le permite reelegirse en el cargo, aún cuando la Constitución Política lo prohíbe taxativamente.

Las acciones políticas del 2010 iniciaron con la promulgación de dos decretos presidenciales: el primero que mantiene en sus cargos a los funcionarios de otros poderes estatales y que debían ser sustituidos por la Asamblea Nacional a inicios de

año; el segundo, modifica las aportaciones patronales al seguro social. En ambos casos el presidente invadió facultades propias de la Asamblea Nacional y violentó nuevamente la Constitución aduciendo que era su obligación por tratarse de temas interés nacional. A esto se agrega la decisión de la presidencia de enviar una misión humanitaria a Haití, sin contar con la ratificación de la Asamblea, tal como lo establece el procedimiento ya que se trataba de fuerzas militares.

Todas estas actuaciones expresan claramente que la voluntad del presidente es gobernar según su propia ley, anulando a los demás poderes estatales y colocándose por encima de la misma Constitución Política. Lo increíble es que a los demás poderes estatales parece no incomodarles la actuación presidencial, y más bien, algunos de sus seguidores en la Corte Suprema y la Asamblea Nacional han intentado justificar los ilegales decretos. Por otra parte, la oposición representada en el parlamento no ha tenido la fuerza suficiente para revertir esa situación, pues se encuentran más preocupados por la repartición de cuotas en la nueva edición del Pacto, que por defender al Estado de Derecho y hacer valer sus facultades. Así, el presidente Ortega ha inaugurado una nueva etapa de gobierno absoluto.

Las exacciones presidenciales apuestan a que su margen de maniobra se mantendrá por el respaldo financiero del presidente venezolano Hugo Chávez, por la fragmentación de la oposición y por la impotencia de los actores externos que sólo pue-

den a lo más, llevarse los fondos de cooperación, mientras que los multilaterales mantengan abierta la bolsa (FMI, BM y BID).

Una nueva edición del Pacto

La forma en que se han venido desarrollando los acontecimientos, pero sobre todo, el comportamiento de la oposición política, particular-



mente la del PLC, no deja lugar a duda respecto a una nueva edición del Pacto entre Arnoldo Alemán y Ortega.

Las dificultades del presidente para conseguir los votos que necesita en la Asamblea Nacional y aprobar sus iniciativas de ley, en realidad no son una expresión del patriotismo y el apego de los diputados a la ley y

a los principios democráticos. Salvo honrosas excepciones, la mayoría de los diputados en realidad han jugado a no prestar su voto para forzar las negociaciones privadas entre los dos caudillos. De la misma manera que el presidente ha optado entonces por presionar las negociaciones gobernando por decreto.

La actitud de los diputados de decir una cosa y hacer otra muy distinta en el parlamento, las recientes declaraciones de Arnoldo Alemán sobre sus pretensiones de correr como candidato en las próximas presidenciales, y las expresiones del presidente de la CSJ y del contralor Arguello Poessy respecto a las propuestas de la sociedad civil para la elección de los nuevos magistrados, indican claramente que se está negociando nuevamente debajo de la mesa y que el Pacto va a ser actualizado.

La intención es mantener el control de ambos partidos sobre las instituciones estatales, quitarle poder a otras fuerzas emergentes, específicamente el Movimiento Vamos con Eduardo y el MRS, y forzar nuevamente al electorado a escoger solamente entre ellos dos. A ese propósito responden los desesperados esfuerzos de Arnoldo Alemán para erigirse nuevamente en líder único de una supuesta nueva alianza liberal. Evidentemente, la negociación no está cerrada, se encuentra en la fase del regateo, pero sus resultados ya se pueden anticipar.

Una oposición tímida

Del lado de la sociedad civil, desde el año pasado se han venido desarrollando acciones en función de articular un frente común en defensa



de la democracia y los derechos ciudadanos. En eso han empeñado su esfuerzo una serie de organizaciones de sociedad civil auto convocadas que han empujado un diálogo entre ellas y han logrado construir ciertos consensos. El momento culminante de este proceso fue la realización de la marcha ciudadana en noviembre, pues logró convocar a personas de todo el país a pesar de las amenazas del gobierno y sus fuerzas de choque, y los intentos de los simpatizantes de Alemán para cooptarla.

A los partidos políticos no les quedó otro camino que aceptar a las organizaciones de sociedad civil como interlocutoras de un incipiente diálogo político y aceptaron sentarse con ellas y una parte de la empresa privada para conjuntar esfuerzos. De allí surgen los acuerdos conocidos como Metrocentro I y II.

Sin embargo, no todos los partidos van con el mismo espíritu. El PLC que siempre ha visto a la sociedad civil como un actor inconveniente, ha intentado torpedearlos, mientras que las fuerzas emergentes como el MVE y el MRS aunque se han acercado con una mejor actitud, todavía no logran comprender la importancia de esta nueva fuerza emergente desde la ciudadanía y todas ellas parecen girar como satélites alrededor del juego que conducirá a la nueva edición del pacto.

Atrapados en el juego de ubicarse como el mejor candidato para las próximas elecciones, o que sombriamente encabezarán la "unidad liberal", los partidos políticos han iniciado un duelo de pañuelos entre ellos en vez de trabajar para ofrecerle a la ciudadanía una propuesta creíble y honesta. Tan es así que ni se recuerdan de próximas elecciones en las regiones autónomas del Caribe.

La única posibilidad de revertir esta tendencia depende de si se expresa la contestación ciudadana y si la oposición puede amputar o aislar sus partes engangrenadas para recomponer una fuerza creíble, políti-

camente consistente frente al manejo del orteguismo y capaz de plantear salidas políticas claras. Nadie sabe si esto se logrará pero el tiempo del calendario político se agota y deja un apretado 2010 para ver.

Nicaragua en la crisis económica mundial

Mientras tanto, en el plano económico, los embates de la crisis internacional llegaron al país, como al resto de América Latina durante el 2009. La región tuvo una caída de 1.8% de su PIB y Nicaragua una caída estimada entre 1.2 y 1.5%. Esto se relacionó con una disminución de las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera. El índice de actividad económica se desplomó a lo largo de todo el año afectando a casi todos los sectores, principalmente a la construcción, con la única excepción del pesquero.

El panorama recesivo influyó, junto como la reducción del consumo y la inversión, para que la inflación no se disparara, manteniéndose durante todo el año pasado en uno de sus niveles más bajos, entre 2.5 y 5% según las estimaciones. Hecho que contrasta con los niveles alcanzados en el 2007 y 2008 de 16.5 y 14%, respectivamente. En acuerdo con el FMI las variables financieras y macroeconómicas se han mantenido de manera prudente, manteniendo las metas en reservas, sin embargo dado los desajustes en el financiamiento del presupuesto así como la pérdida de financiamiento externo, el gobierno no pudo tomar medidas anti cíclicas que mantuvieran la actividad. Las compensaciones derivadas de las exportaciones a Venezuela, la amortiguación de la factura petrolera y los préstamos multilaterales no tuvieron impacto significativo para invertir la tendencia. Por el contrario, en este contexto, la reforma tributaria y el aumento de las cotizaciones al INSS para sostener las finanzas públicas pueden tener un efecto contractivo en 2010.

En perspectiva las previsiones de crecimiento para este año oscilan entre un 2%, según la CEPAL, y un 1%, según la meta acordada con el FMI. Con un papel reducido del estado y dependiente del financiamiento externo se espera que la inversión privada crezca y en dependencia del ciclo de la economía estadounidense y centroamericana, las exportaciones nacionales mejoren.

Si hasta ahora el impacto no fue catastrófico desde el punto de vista de los porcentajes, las previsiones en materia de recuperación son completamente insuficientes. En cualquier caso sería inferior al de antes de la crisis y en el mejor de los casos apenas un crecimiento vegetativo que implicaría una caída del PIB per cápita, dado que no supera el crecimiento de la población.

Estabilidad sin empleo y con pobreza

En relación a las perspectivas el gobierno ha puesto énfasis en las variables que justificarían un manejo prudente, fundamentalmente reservas, inflación y manejo de la deuda. Los economistas independientes discuten acerca del nivel de inversión y crecimiento necesarios para dinamizar la economía, así como del clima político y de inversión para estimular la actividad.

Si bien son énfasis válidos tienen sesgos parciales y acomodaticios con supuestos y visiones muy conservadoras que reflejan una adaptación a las restricciones y da muy poco espacio para discutir cómo salir del hoyo estructural, pero sobre todo porque se escamotean algunas dimensiones claves.

El gobierno pasó del discurso social con el que justificó su campaña (empleo y pobreza), a la ortodoxia económica de la mano del FMI. Las variables presentadas para defender su gestión de la crisis, son todas restrictivas. Lo cierto es que no tenía mucho margen de maniobra producto de los cortes en la coopera-

ción a causa del fraude electoral del 2008, el manejo privado de la cooperación venezolana y la baja ejecución de la inversión pública. En este sentido, la eficacia en apretarse la faja es lo único que se puede mostrar en el plano macro económico. El punto es que los temas de empleo y reducción de pobreza desaparecieron del discurso oficial.

Con las previsiones en curso no puede ser de otra manera ya que son dos sectores donde hay, y habrá, deterioro. El desempleo crecería entre 95 mil personas a 153 mil según los escenarios, y la pobreza entre 153 mil a 171 mil.

Evolución del sector social, en porcentajes según previsiones de crecimiento

Sector	2008	2009	2010	2011
Desempleo	6.1	8.4	9.9 - 10.8	9.7 - 11.2
Pobreza	45	45.5	45.8 - 46.1	45.5 - 46
Pobreza extrema	13.9	14.3	14.5 - 14.8	14.3 - 14.7

Fuente: Funides.

Por lo tanto, si las previsiones se confirman el ajuste de faja sería prolongado y casi una situación estacionaria. El gobierno argumenta que mantendrá y protegerá el gasto social en el presupuesto en un porcentaje aproximado al 40% del mismo. Aunque esto ocurra ya se sabe que la cuestión no es solo de magnitud, Nicaragua es el país con el gasto social más bajo de América Latina. Los problemas de ejecución y calidad del gasto en términos de eficiencia e impacto han sido determinantes como muchos estudios lo han comprobado, pero en ausencia de una evaluación institucional rigurosa y pública, eso no se discute.

Así, no queda otro remedio que seguir con los supuestos de siempre: recuperación del mercado norteamericano y llegada de nuevas inversiones. Dos factores externos, dado que las exportaciones no varían, la maquila representa su principal rubro y aporta poco al tiraje de la eco-



nomía, mientras las debilidades de infraestructura y del mercado interno configuran una situación estructural de muy lenta modificación.

Un debate siempre postergado

De allí que la discusión sobre previsión y tasas de crecimiento en este contexto estructural están sobredimensionadas, aunque sea el centro del discurso económico. Apelar mágicamente a tasas de crecimiento sostenidas de 5 a 6 % anual por un periodo prolongado es válido en las demostraciones estadísticas de lo que se necesita, en la realidad, ayuda poco.

La tendencia dura es que el potencial real de la economía y el impacto del crecimiento, no han demostrado capacidad de aceleración ni de derrame con impactos sostenidos en la disminución del desempleo y la pobreza. Remesas y migración son la otra cara de esta realidad. Todo esto es sabido, ¿por qué repetir entonces lo mismo?

El desgaste por la crisis institucional, el canibalismo político y

el manejo conspirativo de la cosa pública, han hecho imposible un debate constructivo. Sin embargo, es necesario y urgente abrir una discusión sana sobre las políticas públicas y los planes de desarrollo del país.

No se pueden sobrepasar los pequeños arreglos sectoriales, del toma y daca, como ocurre habitualmente entre el gobierno y los empresarios, y que pese a todo, no parecen mejorar el clima de inversión que se mantenía en un 88.4 de opi-

nión desfavorable durante el último semestre de 2009, según Funides. El empresariado del país tampoco ha dado muestras de ser un interlocutor con miras estratégicas que deberían ser asumidas en los planes públicos.

El gobierno, al iniciar su cuarto año de gestión, ha sido incapaz de promover un debate serio sobre el desarrollo del país, más bien se ha concentrado en realizar inversiones misteriosas, ayudas milagrosas no verificables y enjuagues sobre negocios.

La calidad del gasto público y la evaluación de sus programas debería tener verificación y transparencia. La calidad del crecimiento y su estructura, por su lado, deberían ser una preocupación de política pública en el largo plazo y no sólo sumar porcentajes de crecimiento y negocios. Los soportes de la inversión pública y privada así como el gasto público deberían ser igualmente examinados, junto con el papel del sector financiero. Pero en esto también la disponibilidad del gobierno es muy estrecha.